

Escenarios posibles frente al proceso de paz colombiano. Efectos internos y regionales¹

Sandra Borda G.

JULIO DE 2013

Tres grupos de preguntas son fundamentales en el análisis coyuntural del proceso de paz en Colombia. En primera instancia, ¿qué efectos podría tener el éxito del proceso de paz a nivel interno? ¿cómo afectaría el modelo de desarrollo, la cuestión agraria y el proceso político doméstico? En segundo lugar, ¿cómo puede la paz y el final del conflicto interno afectar las relaciones entre civiles y militares en el país? Finalmente, ¿qué efectos puede tener el logro de la paz a través de las negociaciones en el escenario regional y en las relaciones entre Colombia y sus vecinos?

Los potenciales efectos internos del actual proceso de paz

Uno de los rasgos que más llama la atención del actual proceso de paz en La Habana tiene que ver con el nivel de compromiso de las partes negociadoras. De un lado, el presidente Santos tiene—como parte de su agenda de gobierno—un proyecto modernizador y de crecimiento económico para el país cuyo principal obstáculo es justamente el conflicto armado. Las Farc, de otro lado, tienen menos incentivos hoy para pararse de la mesa de negociación, debido principalmente a su relativa debilidad militar frente a las fuerzas del Estado. El compromiso de ambas partes se ha traducido entonces en un proceso que se adelanta bajo el amparo de una agenda pactada, acotada y pragmática. Adicionalmente, se trata de un proceso de negociación discreto y que trabaja bajo la premisa clara de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado.”

A pesar de la existencia de este compromiso de las partes con la negociación, las Farc parecen estar llevando a cabo también un proceso de negociación interno que intenta buscar el respaldo unánime de todos sus frentes al proceso de paz. Ese respaldo se hizo evidente durante el mes de diciembre de 2012 cuando este movimiento insurgente declaró un cese unilateral al fuego que se cumplió, según varios analistas, en un 80%. Este nivel de cumplimiento puede leerse también como una manifestación de la fortaleza y capacidad de mando del Secretariado general de las Farc y de su control sobre los diversos frentes. Adicionalmente, la transformación de la posición política de Iván Márquez en la mesa de negociación puede ser interpretada como el resultado de la moderación del ala más militarista y menos política de esa guerrilla. Hablar hoy, entonces, de la existencia

¹ Este documento sintetiza los puntos sobresalientes de la discusión de dos días en el taller regional de expertos “Efectos regionales del proceso de paz colombiano”, organizado por la Friedrich Ebert Stiftung en Ecuador (FES-ILDIS) y por la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Por supuesto, la responsabilidad de lo escrito aquí reside últimamente en la autora de este documento.



de una fractura al interior de esta organización puede ser desacertado y exagerado.

El diálogo se ha adelantado en dos fases. La primera de ellas tuvo lugar en Oslo y fue allí donde se creó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. En La Habana se ha adelantado la segunda fase en donde se deberán discutir los cinco temas acordados en Oslo: desarrollo agrario, participación política de las Farc, el fin del conflicto, drogas ilícitas y reparación de víctimas. Hasta ahora las negociaciones se han centrado en el tema agrario y aún no ha sido anunciado un acuerdo concreto sobre este tema². La denominada por algunos analistas 'tercera fase' será aquella de implementación de los acuerdos. Se espera que sea este el momento en el que el gobierno movilizará con más efectividad sus recursos políticos e institucionales para que los acuerdos no se desvanezcan en medio de un eventual incumplimiento de los mismos.

De hecho, el presidente Santos ya ha empezado el trabajo de recomponer su coalición política con el objetivo de asegurar un nivel satisfactorio de continuismo en el proceso de paz y la posterior implementación de los acuerdos, aislando de esta forma a los grupos políticos opuestos a la realización de estas negociaciones. No obstante (y de acuerdo con versiones menos optimistas), a pesar de que el gobierno Santos cuenta con un espacio de maniobra importante, la oposición uribista se encuentra en ascenso y cuenta con un apoyo político importante en las zonas rurales del país. Si Santos y su propuesta continuista no retoman el tema agrario y construyen campaña a partir del mismo, el potencial de llegar al poder (Congreso o Presidencia) de la oposición de derecha puede ampliarse.

Adicionalmente, existe la posibilidad de que la izquierda colombiana logre organizarse y armar una coalición que le facilite su acceso al poder en el futuro. No se trata de un proceso fácil en la medida en que las encuestas tan solo otorgan un 3 o 5% de apoyo a las Farc y este apoyo sumado a otras opciones de izquierda en el país, no alcanza a acumular más de un 10% de la votación. El simultáneo fortalecimiento de la izquierda y de la derecha puede contribuir a una mayor polarización política del país que afecte negativamente las perspectivas de la paz en Colombia. En este escenario, sin embargo, existen opciones de centro reales con tendencia a fortalecerse (v.gr. Fajardo, Mockus). Pero es apresurado llegar a conclusiones certeras con vista a las próximas elecciones en la

2 El taller se hizo el 22 de marzo de 2013, antes de que se llegara al acuerdo sobre el tema agrario en la mesa de la Habana.

medida en que el fin del conflicto necesariamente llevará a la reconfiguración de las fuerzas y el pensamiento político en Colombia.

Finalmente, se debe señalar que lograr que estos acuerdos tengan eventualmente un rango constitucional puede otorgarles mayor legitimidad y mayores posibilidades de cumplimiento. Las conclusiones de los foros organizados por el PNUD y la Universidad Nacional alrededor del tema de participación política parecen llegar a la misma conclusión. Igualmente, se hace imprescindible pensar en espacios de participación para los miembros de las Farc en el proceso político colombiano. El movimiento Marcha Patriótica puede constituirse en alternativa ya que, en una buena medida, agrupa parte importante de la base social de este grupo insurgente. Sin embargo, dicho grupo aún no cuenta con personería jurídica para participar en las próximas elecciones.

Relaciones Civiles-Militares

Las Fuerzas Armadas de Colombia, gracias en parte a su reciente proceso de modernización y profesionalización, cuentan hoy con importantes niveles de aceptación entre la opinión pública colombiana. Gracias a este factor y a la notable asimetría militar que existe entre las fuerzas armadas y las Farc en la actual coyuntura, es difícil pensar que la resolución pacífica de la guerra en Colombia resulte en un debilitamiento o reducción de las fuerzas militares y/o de la Policía como si sucedió, por ejemplo, en El Salvador. La experiencia del país centroamericano, de hecho, enseña que esta reducción dramática de las fuerzas de control puede redundar en el fortalecimiento de otras actividades violentas relacionadas con el crimen organizado.

A pesar de que el debate sobre las transformaciones a las que se deberán someter las fuerzas armadas debería darse, según algunos, cuando la paz esté consolidada y no como resultado de la negociación misma, si es preciso adelantar reflexiones sobre un eventual cambio del papel que éstas cumplen en el escenario de un éxito del proceso de paz. El ideal es que las fuerzas armadas dejen de ser una 'fuerza de destrucción' y se logren constituir como 'fuerzas de construcción' que contribuyan a consolidar y reforzar la presencia del Estado, especialmente donde éste ha sido tradicional e históricamente más débil.

Las Fuerzas Armadas colombianas cuentan con ciertos *assets* que pueden ser de gran utilidad para el gobierno en una situación de post-conflicto. Por ejemplo, los miembros de la Fuerza son profundos conocedores del



campo colombiano y se pueden repensar como un puente entre un gobierno central en ocasiones ausente, y un agro con frecuencia marginalizado e ignorado por los gobiernos en Bogotá. En otras palabras y para reiterar, las fuerzas armadas podrían jugar un papel fundamental en el intento por construir presencia estatal en lugares donde ésta ha sido débil o inexistente.

Las fuerzas del orden también deben contribuir en una situación de post-conflicto a facilitar el proceso de reinserción de guerrilleros desmovilizados. Una parte de los aproximadamente 8.000 combatientes probablemente se empleará en diversas tareas, pero es necesario contemplar la posibilidad de que sean re-entrenados y reincorporados en la fuerza pública para que operen, idealmente, en las mismas zonas en las que operaban como guerrilleros. Ello puede ayudar a acentuar la presencia del Estado y además puede facilitar un proceso de reconciliación que borre de una vez por todas las diferencias entre 'buenos' y 'malos'. Este proceso de reconciliación entre combatientes y el de reconciliación entre víctimas (que normalmente es más complejo) son de vital importancia para lograr una reconstrucción integral post-conflicto en Colombia.

Es claro además que una transformación en el papel y la naturaleza de las fuerzas armadas, como resultado del eventual éxito del proceso de paz, también generará cambios en la dinámica de relacionamiento con los países vecinos (especialmente con Venezuela y Ecuador) y por supuesto, también afectará la naturaleza de las relaciones entre civiles y militares en esos países. Es sabido que el nivel de gasto militar en Colombia y el acelerado proceso de profesionalización de su fuerza pública, han generado preocupación entre los países vecinos y otros miembros de la región suramericana. Los cambios que sufra la fuerza pública debido a un posible éxito en el proceso de paz pueden afectar el anterior escenario de diversas formas: puede producir acercamientos y una reducción gradual en la percepción de Colombia como una amenaza, o puede producir un alejamiento aún mayor. La reciente experiencia del anuncio del presidente Santos de acercarse a la OTAN es prueba de cómo el diseño de una estrategia internacional para re-encausar a las Fuerzas Armadas colombianas puede hacer que las divisiones y las sospechas se profundicen.

Efectos regionales de un eventual proceso de paz

Aún es incierto el efecto que la resolución del conflicto armado colombiano tendrá en el escenario regional e internacional. La relación entre la confrontación arma-

da en Colombia y el escenario internacional no ha sido estrecha y ello dificulta la tarea de elaborar predicciones sobre el impacto externo que el logro de la paz en Colombia pueda tener. De un lado, diversos actores internacionales han optado por poner una distancia prudencial frente a la confrontación que tiene lugar en el país debido a los fracasos en negociaciones previas y a la intersección cada vez más visible entre la lógica de la confrontación armada y el surgimiento del crimen organizado y la consolidación del tráfico ilegal de estupefacientes. Esta intersección hace que el conflicto colombiano no encaje fácilmente en los 'modelos' o marcos de referencia de actores estatales externos y organizaciones internacionales.

Adicionalmente, y ya en el marco de las actuales negociaciones, el gobierno Santos y las Farc han decidido limitar sustancialmente la participación de actores internacionales y definir en términos muy precisos las funciones de quienes hacen parte de los diálogos (Cuba, Venezuela, Chile y Noruega). Ninguno de estos actores se encuentra jugando un papel de mediador ni otra función de tan alto perfil y la ausencia de las organizaciones multilaterales es también notoria. Además, otros actores de alto perfil han quedado fuera de la mesa de negociación en parte gracias a un cálculo de las partes sobre los efectos que podría traer su participación en los diálogos. Es el caso de Brasil y Estados Unidos. En lo relacionado con el primero, llama la atención que a pesar de que su liderazgo regional se ha consolidado, el gobierno colombiano aún tiene dudas sobre su posición frente al conflicto colombiano y frente a los roces con Venezuela. Estados Unidos, por su parte, ha hecho varias declaraciones a través de sus portavoces a favor del proceso de paz pero su papel no es comparable al que jugó hace diez años en las negociaciones de El Caguán.

A pesar de la incertidumbre, es posible construir hipótesis sobre tres temas fundamentales de la política exterior colombiana que seguramente se verán afectados en caso de que se concrete la resolución pacífica del conflicto: las relaciones con Estados Unidos, la lucha contra las drogas y la política exterior colombiana en materia de derechos humanos.

Política Exterior hacia Estados Unidos

Con el objetivo de obtener cooperación militar y ayuda financiera para hacer frente al conflicto interno y a la guerra contra las drogas, Colombia ha mantenido una estrecha relación con Estados Unidos y una política de alineamiento que solo se ha profundizado con el tiempo. Ello, a su vez, ha redundado en un relativo apartamiento de la dinámica regional por parte de Colombia. Con-



secuentemente, la eventual finalización del conflicto colombiano podría contribuir a un aumento en los niveles de autonomía de Colombia, a un acercamiento a foros y diálogos sur- o latinoamericanos y en general, a la diversificación de su política exterior. No obstante, si finalizado el conflicto, el crimen organizado y el narcotráfico no disminuyen y al contrario tienden a expandirse, es probable que Colombia no pueda prescindir de la cada vez más reducida ayuda estadounidense y entonces la política exterior no pueda transformarse en la dirección sugerida.

Otro escenario alternativo que de igual forma implica un cambio sustantivo en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos es el de un fracaso en las negociaciones de paz que tienen lugar actualmente en La Habana. Para poner esta discusión en contexto es preciso recordar el papel que jugó Estados Unidos durante y después de la finalización de las negociaciones hace diez años en El Caguán. El gobierno Pastrana adelantó los diálogos con las Farc y simultáneamente negoció el Plan Colombia con el gobierno estadounidense. El objetivo era, con la ayuda militar y financiera estadounidense, fortalecer el aparato militar para la lucha contra las drogas. Dicho fortalecimiento fue de gran uso para la lucha contra la insurgencia cuando después de acabadas las conversaciones y a petición del gobierno colombiano, el gobierno estadounidense levantó las restricciones a la ayuda militar y ella pudo emplearse no solo para la lucha anti-narcóticos sino también para la lucha anti-insurgente. Parte importante del éxito militar logrado por la administración Uribe en el plano contra-insurgente responde justamente a la colaboración militar, financiera y de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos que se profundizó y amplió durante estos años.

En contraste, la tendencia actual de la ayuda estadounidense va en dos direcciones complementarias: de un lado, el volumen de dicha ayuda se ha venido reduciendo gradualmente desde los últimos años de la administración de George W. Bush. De otro lado, el gobierno estadounidense ha tendido a privilegiar cada vez más los componentes 'blandos' de su ayuda y a reducir el monto de su colaboración puramente militar. De hecho, la última propuesta en materia presupuestaria del presidente Obama para la lucha contra las drogas tiende a enfatizar aspectos relacionados con la salud pública y la prevención por encima de una perspectiva criminalizante y militarizada de este problema. Ello también podría redundar en una reducción en la transferencia de recursos militares hacia Colombia. En un escenario en donde la guerrilla continúe siendo un grupo insurgente armado, se hará necesaria la 'nacionalización' del Plan Colombia y ello requerirá mayor inversión en materia militar que

seguro se traducirá en reducciones importantes en el presupuesto nacional dedicado a la educación, la salud, y la infraestructura, entre otros.

Política Exterior en materia de drogas ilícitas

Desde antes del inicio formal de las conversaciones con las Farc, el gobierno anunció un giro importante en materia de su posición internacional frente al tema de las drogas. El presidente Santos ha hecho varias declaraciones y ha sido exitoso en construir alianzas con el fin de iniciar un proceso de discusión global sobre el estado actual de la lucha internacional contra los narcóticos. A pesar de que no ha definido la posición concreta que el gobierno adoptaría en esta discusión, si ha insistido en que la lucha contra las drogas en su forma actual no ha sido exitosa y por ello, es preciso pensar en alternativas diferentes. Esta nueva posición ha facilitado la conversación alrededor del tema de los narcóticos en la mesa de negociación en La Habana y es posible que un acuerdo allí solo contribuya a consolidar el liderazgo colombiano en el esfuerzo internacional por reformular los términos actuales de la guerra contra las drogas.

El efecto que ha tenido el inicio de esta conversación sobre el tema de las drogas en la región es notorio. Después de la Cumbre de las Américas en Cartagena en la que Santos solicitó a la OEA realizar un informe que contemplara posibles escenarios alternativos para lidiar con las drogas ilícitas en el hemisferio, dicho informe fue presentado a los países miembros de la organización en la Asamblea General llevada a cabo en Antigua, Guatemala en junio de 2013. Aunque de esta reunión no salieron conclusiones claras, el debate quedó planteado y se retomará en la próxima sesión de la Asamblea de la OEA. Adicionalmente, otros países han mostrado giros importantes en su posición: el gobierno de Otto Pérez en Guatemala ha hecho explícita su posición a favor de la despenalización de algunas drogas, y México ha acompañado a Colombia y Guatemala en su iniciativa de iniciar una discusión sobre el tema en el seno de la Organización de las Naciones Unidas.

Política Exterior en materia de Derechos Humanos

En materia de derechos humanos, la posición colombiana en el escenario internacional siempre ha apuntado a armar coaliciones y usar estrategias que eviten que pesen sobre el gobierno nacional condenas o enjuiciamientos internacionales. Aquí las tácticas son variadas: el uso de la negociación de la existencia de violaciones masivas a los



derechos humanos y la insistencia en que se trata en la mayoría de las ocasiones de casos aislados de los que no es responsable el Estado sino individuos específicos; las alianzas en foros multilaterales con países también violadores de derechos humanos para evitar que sean impuestas condenas sobre Colombia; y la hostilidad frente a las acusaciones por violaciones de derechos humanos de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales defensoras que trabajan en el tema, entre otras. La administración Santos ya ha cambiado el tono de su política exterior en materia de derechos humanos pero se espera que con la finalización del conflicto, Colombia pueda asumir una posición más digna en este asunto y por qué no, contribuir en la consolidación de los sistemas regionales, hemisféricos y globales de defensa de los derechos humanos.

* * * *

Otra arista en el análisis del impacto internacional de un eventual proceso de paz en Colombia tiene que ver, por supuesto, con los lazos internacionales/regionales de las Farc. Aunque no hay certeza sobre la dimensión y profundidad de los vínculos existentes entre las Farc y los partidos políticos y movimientos de izquierda en la región, si hay evidencia de diversos ‘niveles de simpatía’ entre unos y otros. En algunos escenarios regionales e inclusive en Europa, predomina todavía una versión romántica de la actividad revolucionaria de las Farc. De igual forma, aunque existe una cercanía evidente entre el gobierno cubano y la agenda política de esta guerrilla, es poco lo que se sabe sobre los alcances reales de la influencia del gobierno cubano sobre este grupo insurgente. En cualquier escenario, sin embargo, la relación del grupo guerrillero con simpatizantes internacionales jugará un papel importante en el proceso de consolidación de las Farc como alternativa política legal y desarmada una vez finalizado (con éxito) el proceso de paz.

Finalmente, es preciso decir que la dinámica del conflicto armado colombiano ha producido efectos importantes sobre los países vecinos y en algunos, como es el caso de Ecuador, la guerra colombiana se ha interpretado como una amenaza a la seguridad de dicho país en la medida en que contribuye al funcionamiento del crimen organizado en la zona centro y norte de Ecuador.

Sin embargo, la eventual resolución pacífica del conflicto colombiano no significará el fin de los problemas de seguridad fronteriza entre Colombia y Ecuador. Para ser más precisos, existe la posibilidad de que algunos miembros de las Farc que no se reinserten y hagan parte de los acuerdos, eventualmente pasen a nutrir las filas de

las bandas criminales que operan en el sur de Colombia. Esta es una amenaza particularmente latente en el caso de los frentes 38 y 42 de las Farc. Las mafias transnacionales y el narcotráfico seguirán entonces constituyéndose en un problema grave en el corredor fronterizo. El conflicto colombiano en su actual forma desaparecería y probablemente las denominadas amenazas terroristas en la región como las conocemos hasta ahora cambiarían en su definición y operación. Este escenario requerirá, seguramente, una intensificación y mayor coordinación en los esquemas de cooperación militar bilaterales de Colombia con sus vecinos. Además, requerirá también de la adaptación y transformación de los mecanismos multilaterales destinados a combatir el terrorismo y la criminalidad organizada en el área.

De cualquier forma y a pesar de los *caveats* señalados, la finalización del conflicto armado colombiano necesariamente implicará un ajuste en las posiciones de Colombia y sus vecinos en el nuevo escenario regional. Especialmente en el caso de Colombia, en donde su política exterior ha sido puesta casi en su totalidad al servicio de las necesidades acuciantes en materia de seguridad (insurgencia, crimen, drogas), la finalización del conflicto armado resultará en una reflexión nacional alrededor de la identidad internacional del país y sus (nuevas) opciones de inserción en la arena global después de la guerra. Desde ya, el gobierno Santos ha venido gestando un nuevo proyecto de liderazgo regional que intenta convertir a Colombia en un canal de comunicación entre diversas propuestas político ideológicas en la región y que trata de usar su relación tradicional con Estados Unidos para contribuir a la reconfiguración de las relaciones interhemisféricas.

La situación de los refugiados

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados – Acnur, en Ecuador se encuentran aproximadamente 54.000 refugiados colombianos registrados. La mayoría de ellos provienen de los departamentos de Nariño, Putumayo, Valle y Cauca. Según datos de Acnur, de esta población solo un 36% nombra a las Farc como su persecutor, el 22% nombra al ELN y solo un pequeño porcentaje nombra a la fuerza pública. El resto de responsables por la movilización obligada de esta población son grupos que no son parte del proceso de paz y son identificados como criminalidad organizada. Consecuentemente, el impacto del proceso de paz en la situación de refugiados en Ecuador será limitado.

Hay otras especificidades que es necesario tener en cuenta sobre la situación de los refugiados colombianos en



Ecuador. Aunque las razones que llevan al desplazamiento interno o a la búsqueda de refugio en otro país en este contexto son muy parecidas, por cuestiones legales procedimentales un desplazado interno para hacer parte del registro debe probar que es desplazado pero no necesariamente que es perseguido por un grupo. En contraste, el refugiado sí debe probar que ha sido objeto de intimidación, amenazas, secuestro o confiscación de tierras por parte de un actor concreto. Uno de los problemas con que se enfrentan quienes desean contribuir en la resolución del problema es justamente la ambigüedad de los registros y la falta de homogeneidad en el procedimiento de registro en diversos países (por ejemplo, Venezuela no cuenta con el mismo tipo de datos que Ecuador ni con el mismo procedimiento).

Otra particularidad de este caso es que la población de refugiados resulta en una buena medida de la ausencia de control del estado sobre ciertas regiones, particularmente en el Putumayo. Si el conflicto se soluciona en la mesa de negociación pero la competencia por el territorio continúa y la presencia del Estado no se incrementa, el problema de los refugiados no se va a resolver. Además, una buena parte de los refugiados llegan a Ecuador simplemente en búsqueda de mejores condiciones sociales y económicas que las que ofrecen los departamentos más pobres del sur de Colombia. Estas personas no están en los centros de refugiados sino que se asientan en forma permanente y se incorporan socialmente gracias a la existencia de una afinidad cultural entre los dos países. El resultado del proceso de paz, probablemente, tampoco tendrá un impacto importante sobre este grupo poblacional.

La ausencia de una política fronteriza binacional no solo hace más difícil resolver el problema de los refugiados sino que, además, facilita las actividades del crimen organizado y el contrabando. A pesar de que Ecuador ya ha dado pasos firmes para garantizar la presencia del Estado en la zona fronteriza, Colombia aún está en mora de hacer lo propio, garantizando de esta forma que la zona se convierta en un santuario para la delincuencia. En este sentido, la aproximación de ambos Estados debe ser preventiva y no reactiva y debe basarse en información de inteligencia eficaz y fidedigna.

* * * * *

La posible finalización del conflicto armado en Colombia planteará no solamente la necesaria reacomodación de los países vecinos y de la región a un hemisferio finalmente libre de confrontaciones armadas, sino también un escenario que inevitablemente exigirá un cambio de amplias proporciones en la identidad nacional e internacional de Colombia. El crecimiento económico que ha venido experimentando el país y la profundización de la democracia colombiana que puede surgir como resultado de los acuerdos, pueden finalmente contribuir a promover una suerte de 'modelo colombiano' caracterizado por el pragmatismo ideológico y económico. Un modelo que sea una alternativa de valor en medio de un escenario regional en donde ha tendido a primar, en épocas recientes, la polarización y el dogmatismo político y económico. Pero la reinención de la identidad colombiana no puede terminar siendo una estrategia superficial de marketing y publicidad. El objetivo es, una vez lograda la paz, adelantar una discusión nacional que sirva de insumo a la definición de los objetivos que perseguirá Colombia en el escenario regional e internacional, y que le dé consistencia y profundidad a su política exterior.

Sin embargo, la expansión y consolidación de la autoridad del Estado colombiano sobre el territorio nacional sigue siendo un objetivo por cumplir y sin el cual será difícil adelantar esta reinención de la identidad colombiana. Así el proceso de paz sea un éxito. Se ha sugerido que aún si los acuerdos se logran, las amenazas a la seguridad nacional y regional están lejos de desaparecer. La experiencia centroamericana enseña de manera elocuente que el final de los conflictos armados puede marcar la intensificación de la violencia perpetrada por la criminalidad organizada. El Estado colombiano no es inmune a este efecto. Al contrario, las bandas criminales son un constante recordatorio de las posibilidades que hay en Colombia de que el post-conflicto se 'centroamericanice'. En un escenario como este, la seguridad interna seguirá siendo el determinante del papel regional e internacional de Colombia. Habremos entonces cambiado, para seguir igual.



Autores

Sandra Borda G.: PhD, Profesora Asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia y Coordinadora del Grupo Colombia del Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert (FES).

Programa de Cooperación en Seguridad Regional

El Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la FES busca contribuir al debate y a la construcción de propuestas de política pública para atender los diversos problemas de seguridad en América Latina, en donde amenazas globales, regionales y locales plantean un panorama complejo, ante todo por el desafío que estos problemas, en particular el crimen organizado, representan a la gobernabilidad democrática en la región.

El programa cuenta con una amplia red de trabajo en América Latina, en la que participan expertos, funcionarios, legisladores y representantes de la sociedad civil de diversas disciplinas. Con apoyo de esta red y mediante diversos eventos y publicaciones, el Programa promueve el debate y la difusión de conocimientos sobre asuntos de seguridad regional.

www.fes-seguridadregional.org

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Friedrich-Ebert-Stiftung.